


⏪ Responder a todos | ✓  Eliminar  No deseado Bloquear ...

RV: RECURSO DE REPOSICION CONTRA AUTO QUE MODIFICA MANDAMIENTO DE PAGO Y ORDENA SEGUIR ADELANTE EJECUCION, ENTRE OTROS

 Marca para seguimiento.





Judith Yanet Rodriguez Beltran <yalixis1@hotmail.com>

    ...

Jue 9/09/2021 4:24 PM

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Cundinamarca - Fusagasuga y 3 más

 202109091716.pdf
943 KB



Responder | Responder a todos | Reenviar

Judith Yanet Rodríguez Beltrán
Abogada

Doctora:

JOHANNA GUALTEROS GIL

JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA

**REF.: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE UNICA INSTANCIA
DE. JAVIER ORLANDO PEREZ
CONTRA. ARGEMIRO ALVARADO MURCIA
RAD. 252904203001-2020-00-164-00**

**ASUNTO. RECURSODE REPOSICION CONTRA AUTO QUE MODIFICA
MANDAMIENTO DE PAGO Y ORDENA SEGUIR ADELANTE EJECUCION,
ENTRE OTROS**

JUDITH YANET RODRIGUEZ BELTRAN, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.624.250 expedida en Fusagasugá y portadora de la tarjeta profesional No. 197.549 del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliada y residente en la calle 9 No. 7-33 de la ciudad de Fusagasugá, celular 3118985913 y correo electrónico yalixis1@hotmail.com, en mi calidad de apoderada del señor **ARGEMIRO ALVARADO MURCIA**, demandado dentro del proceso de la referencia; encontrándome dentro del término legal, me permito presentar recurso de REPOSICIÓN, en contra del auto proferido por su despacho de fecha 3 de septiembre de 2021, estado del 6 de septiembre, por medio del cual se modificó el mandamiento de pago y se ordenó seguir adelante la ejecución; con respaldo en la ley, la doctrina y la jurisprudencia, me permitiré en el presente escrito fundamentar mis pretensiones dirigidas a obtener de su Despacho, la modificación de tal determinación que resulta improcedente y violatoria del debido proceso, de acuerdo a la valoración probatoria presentada.

HECHOS

PRIMERO: Las partes **JAVIER ORLANDO PÉREZ** y mi mandante **ARGEMIRO ALVARADO MURCIA**, suscribieron un contrato de compraventa sobre el 50% del establecimiento de comercio denominado **LA GRANJA DE FUSA**, con matrícula mercantil No. 02191703 de la Cámara de Comercio de Bogotá sede Fusagasugá, locales 143 y 144 del primer piso de la Plaza de Mercado de Fusagasugá. Como unidad económica en los términos del artículo 525 del Código de Comercio, el día 16 de febrero de 2017.

SEGUNDO: Para respaldar el pago del negocio jurídico, mi mandante **ARGEMIRO ALVARADO MURCIA** suscribió 14 letras de cambio.

Calle 9 No. 7-33 Centro Fusagasugá. – Celular No. 311 8985913

TERCERO: Si bien mi mandante suscribió las mencionadas letras como respaldo de la obligación contraída en el contrato de compraventa descrito, también es cierto que en el parágrafo de la cláusula segunda del mismo contrato, el vendedor, aquí demandante se comprometió para con mi prohijado a cancelar la suma de \$40.000.000 correspondiente al 25% de la deuda existente con la Alcaldía de Fusagasugá, compromiso este que no cumplió, luego, lo que se evidencia es un incumplimiento al contrato, razón por la cual mi mandate, no dio cumplimiento al pago de los títulos valores restantes, base de la presente acción.

CUARTO: Los títulos valores fueron suscritos para respaldar el cumplimiento de un contrato, no se pactaron intereses.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

No comparto las razones por las cuales el Despacho profirió el auto de fecha 3 de septiembre de 2021, notificado por estado del 6 del mismo mes y año, por medio del cual se modificó el mandamiento de pago y se ordenó seguir adelante la ejecución dentro del proceso de la referencia, entre otras cosas, con base en la prescripción de dos de los títulos valores base de la acción; sin haber tenido en cuenta la interrupción de los términos en razón a la pandemia, lo que a todas luces configura **VULNERACION AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.**

Al respecto se tiene que:

Si bien, el Decreto Legislativo No. 564 de 2020 efectuó precisiones respecto a la suspensión de términos de prescripción y caducidad, en los siguientes términos:

"Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios control o presentar demandas ante la Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o años, **se encuentran suspendidos desde el 16 marzo 2020** hasta el día que Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación los términos judiciales.

El conteo los términos prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión términos judiciales ordenada por Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente."

De acuerdo con lo anterior, coligió la corporación judicial que el cómputo del término de caducidad fue suspendido del 16 de marzo y hasta el 30 de junio de 2020, conforme se dispuso en los referidos Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, **reanudándose el mismo a partir del 1º de julio siguiente.** No obstante, sostuvo que se dispuso una excepción garantista del cómputo del término de prescripción y caducidad respecto de los casos en que el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a 30 días, evento en el que se le concedió al interesado un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar la actuación correspondiente.

Bajo dicha precisión, se tiene que si, como la demanda se radico en **enero de 2020** con base en letras de cambio de fechas de cumplimiento **17 de julio, 17 de agosto, 17 de septiembre y 17 de octubre,** en tanto que el **mandamiento de pago se libró el 20 de septiembre** de 2020 y **se notificó el 24 de noviembre** y, teniendo en cuenta que los términos judiciales quedaron suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio, el despacho tuvo más que tiempo suficiente para decidir, por lo que la prescripción opero nuevamente, a partir el 1 de julio de 2020, es decir que, claramente prescribieron las letras de cambio de fecha de cumplimiento 17 de julio, 17 de agosto y 17 de septiembre, circunstancias estas que el despacho no tuvo en cuenta para declarar probada la excepción de prescripción, únicamente sobre las letras de cambio de fecha de cumplimiento 17 de julio, 17 de agosto; como también paso por alto la interpretación de la norma aplicable:

ARTÍCULO 94. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.

Judith Yanet Rodríguez Beltrán
Abogada

La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo se producirán a partir de la notificación.

La notificación del auto que declara abierto el proceso de sucesión a los asignatarios, también constituye requerimiento judicial para constituir en mora de declarar si aceptan o repudian la asignación que se les hubiere deferido.

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos.

El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez.

Nótese que la norma se refiere al termino con el que cuenta el Despacho para decidir sobre la admisión de la demanda, afirma que La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Luego, si las letras tenían fecha de cumplimiento julio, agosto, septiembre y octubre de 2017, la fecha de prescripción de 3 años se cumplió el 17 de julio, agosto, septiembre de 2020, y si la demanda fue interpuesta en enero de 2020, conforme a la norma, opera la prescripción, pues esta fue interrumpida desde enero de 2020, y, como ya se dijo, la fecha del mandamiento de pago data del 20 de septiembre de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Al respecto tanto la doctrina como la jurisprudencia en diversos pronunciamientos ha expresado:

1. "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas"...

La doctrina define el debido proceso como todo el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguren a lo largo del mismo una recta y cumplida

Judith Yanet Rodríguez Beltrán
Abogada

Administración de Justicia, al igual que la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales proferidas conforme a derecho.

El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las demás funciones del Estado, la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico, sólo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan positiva y negativamente a los servidores públicos. Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté prevista y únicamente puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia.

Es debido a que el proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material.

Dentro de los principios fundamentales del debido proceso recogidos expresamente en la nueva Constitución se encuentra el de que toda persona tiene derecho a promover la actividad Judicial para solicitar la protección de sus derechos e intereses legítimos. El artículo 229 de la Constitución dispone:

"Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de Justicia".

La Constitución impone los principios del debido proceso no solo a las actuaciones de la Rama Judicial, sino a todas las realizadas por las autoridades para el cumplimiento de los cometidos estatales, la prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Este derecho es de aplicación inmediata conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Carta, vincula a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad procesal que pretende dentro de sus fines proteger a los individuos en su dignidad, personalidad y desarrollo frente a eventuales arbitrariedades amparadas en el ejercicio del poder.

En relación con el derecho de acceso a la administración de justicia, el defecto se produce cuando, por un exceso ritual manifiesto, se ponen trabas al acceso y se viola el principio de prevalencia del

Judith Yanet Rodríguez Beltrán
Abogada

derecho sustancial es decir convierte a los procedimientos en obstáculos para la eficacia del derecho sustancial.¹

La formulación del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto contra providencias judiciales tuvo como objetivo resolver la aparente tensión entre el derecho al debido proceso (art. 29 C.P.) y la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.). En principio, estos dos mandatos son complementarios pero en ocasiones la justicia material parecería subordinada a los procedimientos, no obstante, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que las formalidades procedimentales son un medio para la realización de los derechos sustantivos y no fines en sí mismos.²

Como puede observarse, tal defecto puede tener una estrecha relación con el denominado defecto fáctico, que se refiere a la existencia de problemas de hecho y de apreciación de pruebas que llevan a una conclusión errada al juez. Las sentencias T-386 de 2010 y T-637 de 2010 estudiaron la interrelación de estos dos defectos. Adicionalmente, también tiene conexión con problemas sustanciales vinculados con la aplicación preferente de la Constitución cuando los requisitos y formalidades legales amenazan la vigencia de los derechos constitucionales.³

La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha señalado cuáles son los elementos que deben concurrir para que se configure el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto:

- "(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía;
- (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales;
- (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y
- (vi) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales".⁴

En el mismo sentido, la sentencia T-1306 de 2001, precisó:

¹ Al respecto consultar las sentencias T-264 de 2009, T-950 de 2011, T-158 de 2012, y T-213 de 2012.

² Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-104 de 2014, T-747 de 2013, T-591 de 2011 y SU- 498 de 2016.

³ Corte Constitucional, SU- 498 de 2016.

⁴ Corte Constitucional, T-264 de 2009.

Judith Yanet Rodríguez Beltrán
Abogada

"[...] si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material (art. 228).

De lo contrario se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto **que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material.**" (Negritillas fuera de texto original)."

Invoco como fundamento de derecho específicamente el Artículo 318 y siguientes del Código General del Proceso y demás normas aplicables y concordantes.

PETICIONES

Por las anteriores consideraciones, en razón a que se configura la VULNERACION AL DEBIDO PROCESO, EL DERECHO DE DEFENSA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, solicito, respetuosamente a la Señora Juez:

Se MODIFIQUE el auto impugnado por carecer de fundamentos legales para modificar el mandamiento de pago con base en la prosperidad de la excepción de prescripción, **solo sobre dos de las cuatro letras de cambio**, cuando opero la, prescripción sobre tres de las cuatro, luego no debió haberse ordenado seguir adelante la ejecución respecto de las dos letras restantes.

Adicionalmente, en razón a la modificación del mandamiento de pago, se deberá notificar a la parte demandada del mandamiento de pago modificado y correr traslado, para que, en ejercicio del derecho de defensa, la suscrita apoderada, en nombre y representación del demandado, de contestación a la demanda y proponga excepciones de merito que sean del caso.

Judith Yanet Rodríguez Beltrán
Abogada

PRUEBAS

Solicito tener como pruebas los documentos aportados al proceso principal y la actuación surtida en el mismo.

PROCESO Y COMPETENCIA

Al presente recurso debe dársele el trámite indicado en el Artículo 319 y siguientes del Código General del Proceso.

Es Usted competente para resolver esta solicitud por estar conociendo del proceso principal.

NOTIFICACIONES

PARTE DEMANDADA

- La parte demandada **ARGEMIRO ALVARADO MURCIA**, podrá ser notificado en la diagonal 24A No.39ª-85 Barrio Coviprof de la ciudad de Fusagasugá; correo electrónico: piroarge@gmail.com

PARTE DEMANDANTE:

- La parte demandante, **JAVIER ORLANDO PÉREZ**, podrá ser notificado en la Carrera 1 No. 9-46 de Fusagasugá, correo electrónico javierorlandoperez71@gmail.com

De la suscrita: Recibo notificaciones personales en la secretaria de su Despacho o en la calle 9 No. 7-33 de la ciudad de Fusagasugá, celular 3118985913 y correo electrónico [yalixis1@hotmail.com](mailto:yalisis1@hotmail.com).

En los anteriores términos dejo a consideración del despacho el presente recurso, esperando se decida lo que en derecho corresponde.

De Usted Señora Juez, Atentamente,


JUDITH YANET RODRIGUEZ BELTRAN

C. C. No. 39.624.250 de Fusagasugá.
T. P. No 197.549 del C. S. de la J.